



"Al servicio de la Justicia y de la Paz Social"

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO PONENTE
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D. E. de C., T. e I.¹, dos de marzo de dos mil veintitrés

| | |
|---------------|---|
| Radicación n° | 05001-31-03-011-2015-00524-04. |
| Proceso. | Verbal. |
| Demandante. | Martha Elena Carmona Galvis. |
| Demandado. | Sotrames S.A. y otros. |
| Procedencia. | Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. |
| Decisión. | Confirma la sentencia apelada. |
| Sinopsis. | El testimonio técnico se encuentra admitido en nuestra legislación procesal, pero no para suplantar una prueba pericial. / Valoración de la historia clínica y de la calificación de pérdida de capacidad laboral. / Referencia a los criterios de cuantificación del daño. – Análisis de la sanción impuesta a raíz de la objeción al juramento estimatorio. |
| Rdo. Interno | 037-17 |
| Sentencia n° | 005-23 |

I. ASUNTO A RESOLVER.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por ambas partes contra la sentencia de 5 de abril de 2017, dictada por el Juzgado Undécimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso verbal de Martha Elena Carmona Galvis frente a Gilberto Hincapié Soto, Jhon Jairo Uribe Sánchez, Sociedad Transportadora Medellín Envigado Sabaneta S.A., en adelante Sotrames S.A., y Seguros del Estado S.A., quien funge también como llamada en garantía.

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. *"La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."*

II. ANTECEDENTES.

1.- LA DEMANDA.

1.1.- Lo pretendido. Mediante escrito presentado el 24 de abril de 2015, la señora Martha Elena Carmona Galvis demandó a los señores Gilberto Hincapié Soto y Jhon Jairo Uribe Sánchez, así como a las sociedades Sotrames S.A. y Seguros del Estado S.A. para que, mediando los trámites del proceso verbal, se declarara que los primeros tres demandados son civil, solidaria y extracontractualmente responsables de los perjuicios materiales e inmateriales causados en el accidente de tránsito ocurrido el 2 de mayo de 2012.

Igualmente, pidió declarar que *“Seguros del Estado S.A. debe responder por la suma adeudada por su asegurada, dentro de los términos del contrato de seguro que amparaba la responsabilidad civil extracontractual del vehículo de placas SNP-872”*.

Como consecuencia de lo anterior, reclamó que se condenara a los demandados a pagarle \$902.752 por daño emergente; \$523.553.992 por lucro cesante, consolidado y futuro; 60 SMLMV por daño moral, y 70 SMLMV por daño a la vida de relación. Finalmente, solicitó que se indexaran las sumas anteriores; que la aseguradora reconociera los intereses moratorios, y que se impusieran las costas del proceso a los encausados.

1.2.- Los hechos. En sustento de lo pedido, sostuvo que el 2 de mayo de 2012, aproximadamente a las 8:40 p.m., en la avenida El Poblado con calle 29, el autobús de placas SNP-872 la atropelló cuando se desplazaba como pasajera del taxi de placas STB-447.

Del mismo modo, agregó que la Secretaría de Movilidad de Medellín declaró contraventor al conductor del Bus y señaló que, derivado del accidente, *“sufrió traumatismo craneal y latigazo cervical, lo que la volvió agresiva, con dificultades en memoria, depresión, insomnio, inseguridad, temor constante, dificultad para aprender algo nuevo y dolores intensos de cabeza, entre otras afectaciones”*.

A su vez, adujo que fue evaluada por el Instituto Neurológico de Colombia, donde se estableció que padecía un trastorno mixto de ansiedad y depresión, así como un síndrome frontal, razón por la cual, para ese momento, había sido calificada con el 60,4% de pérdida de capacidad laboral.

Igualmente, añadió que al momento del accidente tenía 37 años y que trabajaba para la empresa “*Onix Producciones*”, recibiendo un salario de \$2.200.000 mensuales. Anotó, para finalizar, el factor de imputación de cada uno de los convocados, e indicó que la conciliación prejudicial no había arrojado resultados positivos (fls. 1 a 8, 106 y 107, cuaderno principal, expediente físico).

2.- LA RÉPLICA.

2.1.- Contestación de Seguros del Estado S.A. La Aseguradora aceptó la ocurrencia del suceso y que la actora había resultado lesionada, pero negó que hubiera sufrido secuelas. En este orden, discutió la pérdida de capacidad laboral anexa y desconoció lo concerniente a su trabajo y salario devengado.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, con el fin de enervarlas, planteó las excepciones que denominó inexistencia del nexo causal, inexistencia de la obligación de asumir el pago de intereses moratorios, sujeción a las condiciones de la póliza, límite del valor asegurado e inexistencia de solidaridad (fls. 119 a 125, cuaderno principal, expediente digital).

2.2.- Respuesta de Sotrames S.A. y Gilberto Hincapié Soto. Dijeron atenerse a lo que se pruebe, en relación con el accidente, aunque aceptaron la decisión adoptada en el trámite contravencional. Negaron el traumatismo craneal aparentemente sufrido por la convocante y también discutieron el informe de pérdida de capacidad laboral, dado que las IPS no se encuentran legalmente autorizadas para emitir semejantes conceptos. Desconocieron los demás hechos, excepto el relacionado con la conciliación prejudicial, que aceptaron.

También se opusieron a las pretensiones y para combatirlas propusieron las defensas de inexistencia de relación causal entre el hecho y el daño; abuso del derecho; enriquecimiento sin causa, e intervención directa de un tercero (fls. 164 a 173, cuaderno principal, expediente físico).

2.3.- Postura de la curadora *ad litem*. La representante del codemandado Jhon Jairo Uribe Sánchez dijo que no le constaba la ocurrencia del accidente, pero aceptó los demás hechos, y alegó, como excepción perentoria, la tasación excesiva de los perjuicios, cuya indemnización se demanda (fls. 204 a 206, cuaderno principal, expediente físico).

3.- EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.

Sotrames S.A. y Gilberto Hincapiés Soto denunciaron en pleito a Carlos Augusto Cano Zapata y a Tax Individual S.A., pero ambas denuncias fueron rechazadas. Igualmente, llamaron en garantía a Seguros del Estado S.A., el cual se hizo con fundamento en la póliza de seguro número 65-30-101000282, de 28 de octubre de 2011 y vigente para la fecha del suceso.

Admitido el llamamiento y notificada la llamada en garantía, ésta se pronunció sosteniendo que la póliza no estaba vigente para el momento de los hechos, en tanto había sido revocada con anterioridad, dado el cambio de condiciones en el deducible. Así, fuera de reiterar la respuesta a la demanda y las defensas planteadas, se opuso al llamamiento, para lo cual arguyó que había falta de cobertura, que el Juzgado se debía sujetar a la póliza, tasación de cualquier condena en salarios mínimos mensuales, límite del valor asegurado e inexistencia de solidaridad (cuaderno 3, expediente físico).

4.- LA SENTENCIA APELADA.

4.1.- La decisión del Juzgado. En la sentencia, la a quo declaró a los demandados civil y solidariamente responsables del accidente de tránsito ocurrido el 2 de mayo de 2012 y los condenó a pagar \$22.331.813.94 por lucro cesante consolidado; \$47.157.197 por lucro cesante futuro; 15 SMLMV por daño moral, y 10 SMLMV por daño a la vida de relación, al paso que negó la condena pedida por daño emergente.

Igualmente, declaró que la Aseguradora debía concurrir al pago hasta el monto del valor asegurado, pero negó las pretensiones del llamamiento en garantía.

Condenó en costas a los demandados frente a la demandante, y a Sotrames S.A., a favor de la llamada en garantía.

Por otra parte, fijó los honorarios del perito, e impuso a la demandante, a favor del Consejo Superior de la Judicatura, el pago de la suma de \$45.496.773, a raíz de la objeción al juramento estimatorio.

4.2.- Los fundamentos de las señaladas determinaciones. Inicialmente, estimó la a quo que los encausados habían aceptado la ocurrencia del accidente y las circunstancias de su desarrollo secuencial, pero habían discutido sus consecuencias.

Posteriormente, se refirió al problema jurídico a resolver, el cual concretó en establecer sí, con ocasión del accidente, se derivaron los padecimientos objeto de la indemnización reclamada. Con el fin de resolver este planteamiento, el Juzgado aludió a la fuente normativa de la responsabilidad civil extracontractual, para concluir que el accidente que condujo a este proceso se presentó en medio del ejercicio de una actividad peligrosa, la cual, en línea de principio, conduce a un tipo de responsabilidad objetiva. En esa medida, como no hay duda de la ocurrencia del accidente referido en precedencia, le responsabilidad resultaba indubitable.

Entonces, como el debate se centró en el nexo causal entre ese hecho dañoso y el daño, además de la debida acreditación del perjuicio, la señora *iudex a quo* definió el daño, sus principios y sus componentes, después de lo cual se ajustó establecer su realidad y su debida demostración.

En medio de ese ejercicio razonó, tras analizar la historia clínica de la convocante, así como los estudios de Medicina Legal, que, en efecto, ella sufrió un daño susceptible de ser indemnizado, el que se confirmó con el dicho de los integrantes de la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

A su vez, descartó la versión del denominado testigo técnico, porque no examinó a la actora ni la conocía y, en esencia, no era genuinamente un testigo, algo similar al dictamen del Instituto Cendes, dado que no había cumplido el objeto de la prueba.

Definida la responsabilidad de los convocados y la existencia de un daño susceptible de ser indemnizado, la Juez consideró que no había prueba del daño emergente, pero si del lucro cesante, aunque lo limitó, en tanto la renta reclamada no había sido acreditada y, por lo tanto, dicho guarismo se debía cuantificar con base en el salario mínimo legal mensual.

Del mismo modo, redujo lo pretendido por perjuicio extra-patrimonial en tanto las lesiones eran leves y como la condena era inferior a la reclamación, en la proporción del precepto 206 del Código General del Proceso, impuso el pago de la diferencia a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

5.- LA APELACIÓN.

5.1.- Los reparos concretos. La parte demandante no estuvo de acuerdo con la liquidación del lucro cesante, en cuanto al valor de la renta utilizada para la liquidación de ese rubro, y en relación con el dictamen de pérdida de capacidad laboral aplicado. También se mostró disconforme con las cuantificaciones del daño moral y el daño a la vida de relación, así como por la negación del daño emergente, y discutió la imposición dineraria, como consecuencia de la objeción al juramento estimatorio.

Sotrames S.A., por su parte, adujo que la sentencia se apoyó en la pérdida de capacidad laboral estimada por la Junta de Calificación de Invalidez, la que había sido objetada con pruebas en cuya virtud se podría llegar a una decisión distinta.

A su vez, Seguros del Estado S.A. insistió en la ausencia de nexo causal entre el hecho dañoso y el daño demandado; en la indebida apreciación del dictamen del Instituto Cendes, y en que la a quo sólo tuvo en cuenta el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

5.2.- La sustentación de los reparos.

5.2.1.- La parte demandante adujo, en lo que respecta a la liquidación del lucro cesante, que se debió tener en cuenta la calificación de pérdida de capacidad laboral, expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, dado que era la que mejor reflejaba las condiciones médicas actuales de la

pretensora, teniendo en cuenta que ella mostró alguna mejoría en su salud. Agregó que la experticia presentada por el médico Jaime Ignacio Mejía presenta falencias que impedían seguirla para los efectos de la comprobación del daño.

De otro lado, aseguró que la prueba testimonial daba cuenta de los ingresos de la accionante, superiores a dos millones de pesos mensuales, lo que se debió tener en cuenta, en lugar de aplicar la presunción de ingresos iguales a un salario mínimo legal mensual.

Del mismo modo, argumentó que la cuantificación de los perjuicios extra-patrimoniales es muy baja, partiendo de los precedentes del Consejo de Estado, así como de los testimonios relacionados con la magnitud de los padecimientos sufridos por la demandante.

Igualmente, sostuvo que el daño emergente se había acreditado en punto a las cuotas moderadoras pagadas a la Clínica León XIII y en cuanto son consecuencia directa del suceso, y tocante con la imposición derivada de la objeción al juramento estimatorio, expuso que había sido la Juez de primer grado, quien realmente había objetado el juramento estimatorio, pues los accionados dieron argumentos contradictorios, a modo de objeción, esto es, que era necesaria la sujeción a la calificación de las juntas de invalidez, pero después del supuesto dictamen del Instituto Cendes, era éste el que se debía acoger (fls. 360 a 368, cuaderno principal, expediente físico).

5.2.2.- Sotramés S.A. y Gilberto Hincapié Soto señalaron que la sentencia había tenido en cuenta el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, el cual, consideró, *“es contradictorio y contrario en relación con otros dictámenes que obran como prueba legalmente producida dentro del expediente”* (fls. 350 a 355, cuaderno principal, expediente físico).

5.2.3.- Seguros del Estado S.A. reiteró que según la prueba practicada *“es claro que la demandante no sufrió por causa del accidente de tránsito del 2 de mayo de 2012, los gravísimos daños que aduce, los que muy posiblemente tuvieron una fuente diferente o que se encuentran magnificados para sacar un provecho secundario”*.

Así mismo, llamó la atención respecto a que no se apreció el dictamen del Instituto Cendes, ni se observó el informe de medicina legal. Además, el concepto de la neuropsicóloga, que actuó en la Junta Regional de Invalidez de Antioquia, careció de sustentación y claridad en cuanto a la fecha de estructuración del daño y en lo tocante con los criterios usados para la calificación de la invalidez.

En definitiva, estimó que el dictamen de la mencionada Junta es impreciso y *“calificó una pérdida de capacidad laboral sin soporte objetivo alguno y que se tuvo en cuenta para determinar los perjuicios materiales solicitados por la parte demandante”*. (fls. 356 a 359, cuaderno principal, expediente físico).

III. CONSIDERACIONES.

1.- PRESUPUESTOS PROCESALES. Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso verbal, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

2.- MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE LOS CARGOS. De cara al sistema de pretensión impugnativa, aplicable en materia de apelación de sentencias, en los términos de los artículos 322 y 328 del Código General del Proceso, advierte la Sala que en este caso la responsabilidad de los encausados es asunto definido en la primera instancia y no replicado en ésta, por manera que la ocurrencia del hecho y la prueba de la culpa de los encausados no será abordada en este proveído.

Así las cosas, el Tribunal se concentrará en dos elementos de la responsabilidad civil extracontractual, como son el nexo causal y el daño. En este último punto abordará su acreditación, su intensidad y su cuantificación.

Igualmente, se abordará el juramento estimatorio, en el aspecto debatido, como es la sanción dineraria consagrada en el canon 206 del Estatuto Procesal referido.

3.- EL NEXO CAUSAL. La responsabilidad civil extracontractual, esto es, la nacida de la *lex aquilia*, que en línea de principio prevé artículo 2341 del Código Civil, estriba en cuatro pilares fundamentales, a saber, el hecho, la culpa, el daño y el nexo de causalidad que inicialmente une a los dos últimos. Estos elementos, en atención a lo preceptuado en el canon 167 del Código General del Proceso, deben ser acreditados por el convocante, a menos que se presuma alguno, como sucede precisamente cuando se ejerce una actividad peligrosa, entendiendo por ella la que, *per se*, conlleva riesgo supremo para las personas del entorno, ya que en tal supuesto se presume la culpa del agente demandado, al extremo de obligarlo a probar un fenómeno constitutivo de causa extraña, por ejemplo, la culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito o hecho exclusivo de un tercero, si es que quiere su absolución.

Ahora, la teoría de la presunción de culpa, elaborada a partir del alcance dado por la jurisprudencia al artículo 2356 del Código Civil, tiene su razón de ser en la necesidad de favorecer a las víctimas en los casos donde se palpa un desequilibrio de las fuerzas existentes entre los asociados, esto es, cuando para desarrollar determinada labor, precisamente el hombre adiciona, a su energía, otra exterior, colocando a los demás en inminente peligro de recibir lesión en su persona o en sus bienes.

Eso sí, debe quedar claro que la presunción de culpa comentada no apareja una presunción del nexo causal, al menos no respecto del puente que une al hecho, objetivamente considerado, con el daño; esto es, en el análisis de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual surgida del ejercicio de actividades peligrosas, se pueden encontrar dos nexos; de un lado, el que ata al hecho con el daño, de obligatoria probanza por parte del actor, aunque en ocasiones la demostración del hecho lo acredita de paso, y, de otro, el que une la culpa del demandado, presunta como se vio, con el perjuicio, cuya acreditación no es menester del pretensor, en tanto es el convocado el que debe desvirtuarlo, previa alegación de una causa ajena.

Pues bien, siendo ello así, en este tipo de procesos debe brotar ostensible el nexo entre el hecho y el daño, pues de lo contrario, por más presunción de culpa que haya, la pretensión indemnizatoria no saldría abante. Y ello tiene toda lógica porque si el hecho imputable al encausado no conduce al daño, éste no tendría

responsabilidad alguna en el detrimento, en cambio sí del hecho se deriva el perjuicio, la indemnización de abrirá paso, salvo que se acredite una causa extraña o se evidencie que, a pesar del hecho, el daño no fue causado.

En esa medida, el nexo de causalidad implica la *“necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido”*, como lo define Ramón Daniel Pizarro en su obra Responsabilidad Civil por Riesgo Creado y de Empresa, tomo I, Editorial Buenos Aires, 2006. p. 87. Es un elemento común a todo tipo de responsabilidad civil, en cuanto es necesario que exista una conexión entre el evento dañoso, no necesariamente culposo, que lesiona a quien exige ser reparado.

Sobre este particular, en SC del 14 de diciembre de 2012, Exp. 11001-31-03-028-2002-00188-01, la Corte Suprema de Justicia consideró:

“En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que ‘el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...’

Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible; aunque ese hecho no tiene que ser necesariamente el resultado del despliegue de un acto positivo, sino que bien puede acontecer por abstenerse de ejecutar una acción cuando se tiene el deber jurídico de actuar para evitar o prevenir una lesión. Es decir que la responsabilidad también puede tener lugar por una abstención u omisión en la acción.”

En suma, el nexo cumple un rol estructurador de responsabilidad, en tanto permite establecer una relación de causa - efecto entre la conducta del señalado victimario o hecho dañoso, en ocasiones, como la anotada, desprovisto de juicios de reproche, y el detrimento causado, dando lugar al establecimiento de una conexión fáctica entre éste y la víctima.

4.- EL DAÑO. / Requisitos para su indemnización. Como la responsabilidad civil extracontractual se centra en el principio de indemnización integral del daño causado, en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, es manifiesto que dicho menoscabo es elemento central del esquema de

responsabilidad, y ese detrimento no es otra cosa que la afectación patrimonial o extra patrimonial, antijurídica por demás, que sufre una persona en su vida, honra o bienes, o lo que es lo mismo, que lesiona un interés jurídicamente tutelado y que, por ende, debe ser resarcido o compensado de algún modo, incluso cuando no sea posible la reparación efectiva.

En tal medida, la doctrina patria ha dicho que el daño sólo es indemnizable cuando es cierto, subsistente, personal y hubiese afectado un interés lícito, y ha especificado que es cierto el que efectivamente se produjo; mientras su subsistencia descansa en el hecho de que el mismo no ha sido remediado, compensado o indemnizado. Igualmente, el daño es personal porque únicamente la víctima, ya directa, ora de rebote, o sus herederos, tienen derecho a demandar el detrimento padecido; y, por último, haber afectado un interés lícito implica que el causante del daño no estaba legitimado para producirlo, por lo que el perjudicado tenía derecho a gozar del interés patrimonial o extra patrimonial que se ha visto reducido.

Adicionalmente, con relación a la certeza del daño es necesario advertir que la normativa conmina al perjudicado a demostrar su existencia, en virtud del principio *incumbit probatio actori*, consagrado por el legislador colombiano en el precepto 167 de la ley adjetiva civil, sin lo cual es imposible acceder a la indemnización que se reclama.

En ese orden, se insiste, sin la prueba fehaciente del daño y su valor, sin sustento se queda el reclamo para que se imponga su resarcimiento o compensación, al paso que si es clara su causación ésta saldrá avante por el monto de lo así acreditado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que “*sólo corresponde reparar el perjuicio que se presenta como real y efectivamente causado y como consecuencia inmediata de la culpa o el delito*”, y ha puntualizado así mismo, “*de conformidad con los principios regulativos de la carga de la prueba, quien demanda judicialmente la indemnización de un perjuicio que ha sufrido le corresponde demostrar, en todo caso, el daño cuya reparación persigue y su cuantía, puesto que la condena por tal aspecto no puede extenderse más allá del detrimento padecido por la víctima*” (SC, 22 mar. 2007. Exp.: 05001-31-03-000-1997-5125-01).

5.- CASO CONCRETO.

5.1.- Síntesis de la postura de la parte demandada. Después de la decisión de primera instancia, que entendió acreditado el daño, como consecuencia del accidente, en la proporción indicada en la segunda calificación de invalidez, esto es, en el 34.6%, los demandados vienen discutiendo que en el proceso hay varios dictámenes, dentro de ellos el observado por la a quo, el cual, en su criterio, es contradictorio e impreciso. En esa medida, se debió tener en cuenta el practicado por el Instituto Cendes, demostrativo de que la activa no sufrió los graves perjuicios demandados, ni estos se causaron a raíz del suceso originario de este proceso.

5.2.- Análisis de la prueba practicada. Inicialmente, es pertinente mencionar que la sentencia apelada no sólo se fincó en el último dictamen de pérdida de capacidad laboral, dado que estimó la historia clínica y cuestionó el testimonio técnico, así como el dictamen proveniente del Instituto Cendes, de manera que, más allá de las censuras, lo cierto es que la sentencia analizó toda la prueba recabada y como, en los cargos se da cuenta de ella, la Sala analizará todo el material demostrativo, en orden a desentrañar lo concerniente al nexo causal y a la prueba del daño.

En esa medida, encuentra la Sala que el Instituto Nacional de Medicina Legal valoró a la accionante y emitió varios informes de clínica forense. El 8 de junio de 2012, es decir, un poco más de un mes del accidente, señaló que la señora Martha Elena Carmona Galvis había padecido un *“esguince cervical”*, pero como en el examen físico la encontró *“consciente, orientada en tiempo, persona y espacio, deambulando por sus propios medios, sin déficit motor ni sensitivo, con lesiones descritas en el reconocimiento anterior con buena cicatrización y consolidación”*, consideró que la incapacidad definitiva era de 25 días, *“SIN SECUELAS MEDICO LEGALES”*, pese a que la paciente había referido mareos frecuentes (fl. 42).

El 12 de junio de 2013, o sea, transcurrido un poco más de un año, después del accidente, el mismo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se refirió al accidente, a las evaluaciones realizadas y a los síntomas denunciados por la señora Martha Elena, para luego conceptuar: *“ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES. Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA VEINTICINCO (25) DÍAS”*, pero esta vez, frente a las posibles secuelas, no las descartó, sino que adujo: *“Secuelas médico legales a determinar. Debe ser nuevamente evaluada por neurología, para descartar*

trastorno neurológico, pues la evaluada dice que presenta mareo, acompañado de desorientación durante un periodo aproximado de dos horas” (fl. 43).

Y el 20 de noviembre de 2013 (fl. 45), es decir, un año y medio después del accidente, el mismo Instituto afirmó:

“Se queja de mareo, pérdida de la memoria, sensación de pesadez en cuello. Ha sido evaluada por diversas especialidades sin que se logre diagnosticar la causa de sus síntomas. La última evaluación de neurocirujano de agosto de 2013 hace diagnóstico de trastorno de estrés post traumático, y se la ordenó EEG que es reportado como normal.

Se sugiere nueva valoración por otorrino y remisión para valoración por psiquiatría forense mediante oficio.

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Mecanismo traumático de lesión: Contundente, incapacidad médico legal DEFINITIVA VEINTICINCO (25) DÍAS, sin secuelas médico legales al momento del examen”

Del estudio de estos informes es posible concluir que tan solo un mes después del accidente, el Instituto de Medicina Legal negó cualquier tipo de secuela derivada de éste, pero un año más tarde concluyó que las secuelas estaban por determinar, dado que, si bien no había lesiones externas, podría haberlas internas, razón por la cual aludió a la necesidad de un examen por neurología, para descartar trastorno neurológico, y después, en la última evaluación practicada por Medicina Legal, aunque anotó nuevamente que no habían secuelas al momento del examen, no desconoció que en la última valoración “*de neurocirujano*” se diagnosticó trastorno de estrés post-traumático.

Los encausados insisten y quieren hacer ver que en todo momento el Instituto de Medicina Legal negó las secuelas, pero ello no es del todo cierto, dado que mencionó la necesidad de otras evaluaciones, aludió a posibles trastornos y en un momento estimó que estaban por determinar. Luego, los mencionados informes no son indiscutibles, en orden a concluir que del accidente no se derivaron consecuencias para la salud de la hoy pretensora.

Ahora bien, esa prueba tampoco evidencia la causación de dolores y afecciones derivadas del suceso, por lo que resultaba imperioso acudir a otras

pruebas, dentro de ellas, el informe de evaluación de la Neuropsicóloga Ángela María García Giraldo del Instituto Neurológico de Colombia, según el cual:

“CONCLUSIONES.

- *Estado general de conciencia por debajo de lo esperado.*
- *Alteración de la memoria verbal y visual tras interferencia, de memoria verbal inmediata o de trabajo, a corto plazo, lógica y asociativa.*
- *Fallas viso-preceptúales.*
- *Dificultades para nominar.*
- *Alteración de la función ejecutiva.*
- *Es reportada con comportamientos que son sugestivos de un síndrome frontal.*
- *Se reporta con características propias de un Trastorno Mixto de Ansiedad y Depresión.*
- *A nivel del estado funcional y del deterioro global, la paciente es reportada dentro del grado 2 y 3, correspondiente a un deterioro cognitivo leve”. (Fl. 54).*

Este informe es importante, en tanto se generó al cabo de dos años del accidente, es decir, tiempo después de las evaluaciones de Medicina Legal, y en él se evidencia un deterioro cognitivo leve, lo que se asemeja a lo dicho, aunque sujeto a otros exámenes, por el Instituto de Medicina Legal; es más, esta apreciación advierte que el motivo de la consulta son las dificultades referidas después del accidente, con lo cual se observa la prueba del daño y su nexa con el choque.

Por supuesto, la anterior conclusión no es única y por eso es necesario observar las demás pruebas, como la historia clínica de la señora Martha Elena, en cuya virtud, no hay duda que a dicha paciente le hallaron *“DOLOR A LA PALPACIÓN DE COLUMNA CERVICAL”* y le diagnosticaron *“TEC LEVE Y TRAUMA CERVICAL”* (fl. 55). Esa prescripción data del 2 de mayo de 2012, fecha del accidente, pero se mantuvo por un tiempo prolongado, dado que el 12 de marzo de 2014 (fl. 79, vuelto), esto es, casi dos años más tarde, le diagnosticaron *“vértigo de origen central”* al ingreso, y *“traumatismo intracraneal, no especificado”*, a la salida.

En este orden, la historia clínica, iniciada después del accidente ocurrido el 2 de mayo de 2012, dio cuenta de lesiones que se mantuvieron con el paso de los años, razón por la cual perfectamente se podía concluir que a raíz del accidente no sólo se causó un TEC leve y trauma cervical, sino que quedaron secuelas como el vértigo de origen central o el traumatismo intracraneal.

Por otra parte, si analizamos las dos valoraciones de pérdida de capacidad laboral, preliminarmente parecen muy diferentes, dada la disconformidad en los porcentajes asignados, pero a la larga guardan una similitud innegable, consistente en que ambas valoraciones parten del supuesto de deficiencias que afectan la capacidad laboral, la primera, por la afectación del sistema nervioso central y, la otra, por trastorno cognitivo leve, de manera que, más allá de los valores asignados, lo cierto es que la actual demandante presentaba derivaciones importantes del accidente, que la disminuían en su destreza ocupacional.

Fuera de lo anterior, es posible adicionar la apreciación de los profesionales que hicieron la última valoración de pérdida de capacidad laboral, dado que ellos afirmaron haber estudiado el Informe del Instituto Neurológico de Colombia y, tras la entrevista y estudio físico de la activa, entendieron que la señora Martha Elena efectivamente sufrió un TEC leve y latigazo cervical y aunque no hubo una lesión cerebral estructural, a la postre se generó un trastorno cognitivo leve.

Inclusive, el médico afirmó que el TEC leve no siempre genera un deterioro cognitivo, pero no se puede descartar, por la pérdida neuronal (min. 43:40, video 3, audiencia de instrucción y juzgamiento), y agregó que, a pesar de exámenes normales, ello no significa que *“no haya un daño fisiológico a nivel cerebral, y para ello son las pruebas neuropsicológicas. Cuando se determina que no hay unas lesiones o hay unas lesiones para cuantificar hasta cuanto es el daño que aparece en un estudio de imágenes, entonces para eso se hacen las evaluaciones neuropsicológicas, a veces una resonancia, un TAC puede aparecer normal, pero el daño intrínseco en las lesiones neuronales puede existir y para ese se mandan la evaluación neuropsicológica, porque es la única que nos puede determinar que daño y a qué nivel puede existir el daño”* (min.: 50:07 a 50:40, video 3, audiencia de instrucción y juzgamiento).

El análisis de estas probanzas permite colegir que la señora Martha Elena Carvajal Galvis sufrió un TEC leve y latigazo cervical, luego del accidente acaecido el 2 de mayo de 2012, y de esas lesiones se derivó un daño cognitivo leve, es decir, se presentaron secuelas que guardan relación causal con el accidente y que, por tanto, son susceptibles de ser indemnizados.

Desde luego, no olvida la Sala que hay pruebas que sugieren una conclusión diferente.

Ciertamente, el médico Elkin Eduardo Vásquez Correa, quien fue llamado a declarar como testigo técnico, adujo inicialmente que no conocía a la demandante y luego de decir que había analizado la historia clínica, sostuvo que según ese documento la paciente había llegado orientada y la lesión cerebral no fue severa. Es más, anotó que los síntomas no necesariamente tienen que ver con el accidente (min. 6:11 a 6:35, video uno, audiencia de instrucción y juzgamiento)

También expuso que los traumas encéfalo craneanos leves no generan pérdida de conciencia, sino desorientación, lo que sucedió con la convocante, y adujo que ella había sufrido un latigazo cervical, más no un trauma encéfalo craneano, y añadió que *“en medicina, los síntomas son del diario vivir, pero lo neurológico requiere evidencia de lesión en el sistema nervioso central”* (min. 16:52).

Del mismo modo, declaró que el esguince cervical puede provocar molestias en el cuello, pero no ansiedad e irritabilidad. Es más, los traumas de cráneo no tienen que ver con lo cervical y remató diciendo que en su opinión las quejas sintomatológicas de ella son muy posteriores al evento (min. 21:59).

Si se valorara esa declaración en forma aislada sería posible concluir que no se presentó el daño denunciado o, si se dio, no guarda relación con el accidente. Sin embargo, el mismo testigo aseguró que no tenía claro lo que había pasado en el cerebro de la demandante, de suerte que, al final del día, esa declaración no es terminante para negar la causación del daño o su nexo con el accidente. Por otra parte, el hecho de que el especialista no hubiera examinado a la actora, en tanto no la conocía, es relevante porque los demás galenos que declararon o que conceptuaron sobre lo ocurrido, si pudieron evaluarla y tener un conocimiento directo y de primera mano.

Es cierto que el testigo técnico debe presenciar los hechos respecto de los cuales declara, además de aportar sus especiales conocimientos sobre la percepción de ellos, pero dicha circunstancia, por si sola, no le elimina la valía demostrativa del dicho del médico Vásquez Correa, como lo hizo la a quo, porque

sus explicaciones se podían valorar a modo de un concepto experto, aceptado por la jurisprudencia², en los siguientes términos:

“El testigo técnico en nuestro ordenamiento procesal es aquella persona que, además de haber presenciado los hechos, posee especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre ellos (art. 227 C.P.C., inc. 3º; y art. 220 inc. 3º C.G.P.), cuyos conceptos y juicios de valor limitados al área de su saber aportan al proceso información calificada y valiosa sobre la ocurrencia de los hechos concretos que se debaten.

Los conceptos de los expertos y especialistas no pueden equipararse a los testimonios técnicos, pues cumplen una función probatoria completamente distinta a la de éstos, en la medida que no declaran sobre los hechos que percibieron o sobre las situaciones fácticas particulares respecto de las que no hubo consenso en la fijación del litigio, sino que exponen su criterio general y abstracto acerca de temas científicos, técnicos o artísticos que interesan al proceso; aclaran el marco de sentido experiencial en el que se inscriben los hechos particulares; y elaboran hipótesis o juicios de valor dentro de los límites de su saber teórico o práctico. Dado que el objeto de este medio de prueba no es describir las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos sobre los que versa la controversia, no tiene ningún sentido tomar juramento a los expertos sobre la verdad de su dicho, pues –se reitera– éstos no declaran sobre la ocurrencia de los hechos en que se fundan las pretensiones, sino que rinden criterios o juicios de valor.

Tampoco es posible asimilarlos al dictamen pericial, porque, aunque tienen una finalidad parecida, se alejan sustancialmente de la función que cumple este otro medio de prueba, y no se rigen por sus rigurosas y restrictivas normas sobre aducción, decreto, práctica y contradicción.

Los conceptos o criterios de los expertos y especialistas son medios de prueba no regulados expresamente en el estatuto adjetivo, pero perfectamente admisibles y relevantes en virtud del principio de libertad probatoria que rige en nuestro ordenamiento procesal (art. 175 C.P.C.; y art. 165 C.G.P.), en la medida que son útiles para llevar al juez conocimiento objetivo y verificable sobre las circunstancias generales que permiten apreciar los hechos; no se oponen a la naturaleza del proceso; no están prohibidos por la Constitución o la ley; y el hecho alegado no requiere demostración por un medio de prueba legalmente idóneo o especialmente conducente.” (Negrillas de la Sala).

Finalmente, se tiene el dictamen, tantas veces mencionado, emitido por el Instituto Cendes, el cual fue descartado por la a quo, por haber variado su objeto. Empero, uno de los cuestionamientos que el perito debía resolver, según la petición visible a folio 193 y el decreto de la prueba, incluida en el auto de 23 de noviembre de 2016 (fl. 213), consistía en “*si es posible, como lo indica la evaluación del INSTITUTO NEUROLÓGICO DE COLOMBIA la demandante presentara ‘un estado*

² SC9193 de 28 de junio de 2017. Exp.: 11001-31-03-039-2011-00108-01.

general de conciencia por debajo de lo esperado para su edad, fallas en la memoria de evocación, atención y cálculo, alteración en estado en alerta mental, alteración en la memoria visual y verbal, alteración de la memoria verbal inmediata o de trabajo, fallas viso-perceptuales para la conclusión visual, fallas para nominar y dificultades para motorizar tareas, manejo de conceptos abstractos pensamiento conceptual y rigidez cognitiva”, lo que, en palabras diferentes, fue definido por el perito, dando respuesta a ese interrogante, de suerte que tal dictamen no podía ser descartado, en la forma que lo hizo la juzgadora de primer grado.

Fíjese que el perito sostuvo:

“Esfera mental: con un porte y actitud normales, aceptable estado general, adecuada presentación personal, conciencia alerta, orientada en tiempo, lugar y persona, sensorio percepción normal, atención preservada, memoria reciente, inmediata y remota conservadas, afecto modulado, pensamiento en origen, curso y contenido normales, no alteraciones psicomotoras, lógica, coherente, estado de ánimo normal, refiere quejas de disminución de la memoria, pero las pruebas objetivas lo descartan, no ideas de muerte, suicidio ni otras cogniciones depresivas, no síntomas psicóticos, no hay déficit cognitivo, no movimientos anormales, juicio de realidad conservados, raciocinio para su nivel formativo coherente, inteligencia promedio, pensamiento lógico, coherente y real, actitud calmada, lenguaje de tono, intensidad y prosodia normal, conducta y actividad motora normal para su condición (energía psíquica capaz de producir acción de preserva), introspección positiva, prospección positiva.

Impresión diagnóstica:

A la fecha de esta valoración es una persona sana.” (fl. 13, cuaderno 7, expediente físico).

No obstante, lo anterior, pese a que el dictamen se podía y se debía valorar, lo cierto es que éste se presentó el 31 de enero de 2017, fecha posterior a la primera valuación de la IPS Universidad de Antioquia, que data del 11 de octubre de 2014, lo cual puede explicar diferencias en la paciente, y aunque es de la misma época a la de la segunda valoración, esto es, de la proveniente de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, elaborada el 23 de febrero de 2017, lo cierto es que ésta se impone, no solo porque combinó el conocimiento de tres galenos, dos de ellos expertos en salud ocupacional y una en psicología, sino también porque la prueba se decretó con un médico neurólogo y fue practicada con uno dedicado a la valoración del daño.

Pero, además, las conclusiones de los médicos de la Junta son mayormente estimables porque, además de la valoración física y del estudio de la historia clínica,

explican que al daño fisiológico a nivel cerebral puede darse pese a exámenes con resultados normales. De hecho, el dictamen del médico Jaime Ignacio Mejía Peláez, del Instituto Cendes, al igual que las condiciones del doctor Jorge Alberto Martínez Chavarriaga, evidencian un estado aparentemente normal de la paciente, cuando el segundo, parecido a lo relatado por el primero, señala: *“no masas o megalias abdominales, AMAS de rodillas completos, no edemas en pies, camina independiente, marcha conservada, se observa columna centrada , AMAS de c. cervical conservados, no refiere dolor, no espasmo muscular paravertebral”*.

Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que la Junta, a nivel de psicología encontró un *“síndrome frontal y trastorno mixto de ansiedad y depresión”* (fl. 3, cuaderno 8, expediente físico), lo cual explica la profesional en psicología, cuando afirma que la parte médica no encontró lesión estructural neurológica, y la neurológica encontró trauma cognitivo leve, lo cual completó indicando que al no haber daño estructural no hay invalidez, pero como hay un daño cognitivo leve, ubicado como un trauma frontal leve, la calificación arroja un 34.6% de pérdida de capacidad laboral.

Entonces, contrastando los dos informes periciales e incluso, analizando el testimonio o concepto técnico, se puede concluir que la señora Martha Elena Carmona Galvis sufrió un TEC leve y un latigazo cervical que condujo a un daño cognitivo leve, como consecuencia del accidente de tránsito. Seguramente, su cuadro general es normal, pero ese daño, ubicado como trauma frontal leve, reduce sus capacidades laborales y, por tanto, no es posible catalogarla como una persona completamente sana, sino, efectivamente, como una persona lesionada y con secuelas, pese a su levedad.

Además, la calificación de pérdida de capacidad laboral precisó de un experto en valoración psicológica, lo que no se hizo en el informe del Cendes o el dicho del médico Vásquez Correa, de manera que la valoración de la junta es más completo, preciso y detallado, conoció la paciente, la entrevistó y no se limitó a su aspecto físico atlético, sino que valoró su aspecto mental, en donde radica el problema central de la activa, más allá que no es grave, ni moderado.

Esa completitud, participación de un grupo interdisciplinario, comprensión y precisión resultan ser los condimentos para que un estudio experto se imponga sobre otro, en los términos del canon 226 del Código General del Proceso cuando

dispone que *“todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.”*

Sobre este particular, en SC5186 de 18 de diciembre de 2020, exp.: 47001-31-03-004-2016-00204-01, la Corte Suprema de Justicia explicó:

“La fiabilidad del conocimiento experto, llevado al proceso a través de los medios de ciencia (dictámenes, testimonios técnicos e informes, entre otros), ha sido objeto de una preocupación en el ordenamiento jurídico interno y en el derecho comparado. Más allá de las credenciales del perito, la búsqueda de dicha condición se ha centrado en cómo el juez puede evaluar racionalmente la calidad de la experticia. Examina, ante todo, la consistencia, claridad y solidez dada por la validez del método o técnica subyacente, la utilización en los hechos del caso y la ilación lógica entre los fundamentos y la conclusión resultante.

(...)

En tiempo reciente, esta Sala de Casación perfiló el análisis del dictamen pericial destacando su razón de ser como "un estudio de ciencia". Retomó el deber del experto de fundar su opinión en la evaluación completa de los hechos; la conexión lógica entre la investigación y la conclusión; e hizo explícito de la fundamentación, el elemento que constituye su principal soporte, el método y la técnica aceptados por la generalidad de la comunidad científica.

‘Los peritos formulan una conclusión lógica derivada de sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos basada en la observación de los hechos; su aporte en la consecución de la verdad es, como dice EDUARDO J. COUTURE, un elemento de elaboración en la génesis lógica de la sentencia que exige de los expertos designados un análisis conjunto de las personas o cosas objeto del dictamen, valorando todos los aspectos sobre los que deba emitirse su criterio. (Art. 237 CPC). El informe de los auxiliares de la justicia se presenta ante el Juez, como un estudio de ciencia, aplicando para ello, los métodos aceptados a nivel general e internacional, que ofrezcan la mayor garantía de certeza, seguridad u confiabilidad. Corresponde al funcionario judicial calificarlo q valorarlo, a fin de definir una controversia entre ciudadanos, verificando la observancia de los requisitos básicos en la realización de la prueba, así como la idoneidad en todo el procedimiento.

Son dos etapas diferentes, debiéndose cumplir primeramente con la interpretación por parte del perito designado, para luego entrar a la definitiva, contemplada por la valoración jurídica que de la prueba realiza el operador judicial. La fuerza vinculante nace de la hermenéutica dispensada a aquella, ya que es el juez el que tiene el poder Estatal derivado de la soberanía, para emitir una decisión definitiva de obligatorio cumplimiento (...). "No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, como ya se esbozó en anotación anterior, se realizará mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le

permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo”.

De manera que, corresponde al juzgador, cuando hay varios y disímiles criterios, provenientes de expertos, establecer cuál de ellos le produce mayor grado de convicción, dado el cumplimiento y satisfacción de los criterios arriba señalados. Como en ese laborio, se impone el dictamen de la Junta Regional de Invalidez, la cual, adicionalmente va de la mano de la historia clínica, de la evolución de la paciente y de conceptos que, al igual que éste, muestran un grado de discapacidad, no es posible, así vistas las cosas, decir que la demandante está completamente sana, que no hay daño o que éste preexistía al accidente, razón por la cual, en este punto se le haya razón a la a quo, más allá que no entró a valorar criterios técnicos que, por lo visto, debían ser analizados.

En definitiva, los cargos de los accionados no están llamados a prosperar, por lo que, se reitera, en estos aspectos la sentencia apelada debe ser confirmada.

5.3.- Análisis de los reparos de la demandante.

5.3.1.- Debemos recordar que los reparos de la demandante se pueden sintetizar así:

No estuvo de acuerdo con la renta utilizada para cuantificar el lucro cesante, en tanto había acreditado que devengaba poco más de dos millones de pesos; además, se mostró inconforme con la negación de la indemnización por daño emergente, así como, en punto a la tasación de los perjuicios extrapatrimoniales, y adujo que no debía imponérsele sanción, en virtud del juramento estimatorio.

La Sala se pronunciará respecto de cada uno de los reparos en forma individual, de la siguiente manera:

5.3.2.- Estudio relativo a la liquidación del lucro cesante. Según las voces del artículo 1614 del Código Civil, el lucro cesante comprende *“la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.*

Siguiendo la doctrina nacional, se tiene que este tipo de daño se origina *“cuando un bien económico que habría de ingresar en el curso normal de los*

*acontecimientos, no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima*³, es decir, este concepto comprende las ganancias que el afectado, ya directo, ora de rebote, ha dejado de percibir a causa del siniestro. En otras palabras, si el suceso se deriva una incapacidad prolongada en el tiempo, o se causa el deceso de quien proveía la manutención, claramente se deja de reportar un provecho económico; en el primer caso porque el lesionado no puede ejercer la labor lucrativa; en el segundo, dado que la fuente de ingresos del beneficiario, por ejemplo, de los alimentos, ha sido suprimida como consecuencia del hecho dañoso.

Para la cuantificación del lucro cesante, resulta imprescindible definir la renta que antes del daño recibía la víctima, esto es, la que se redujo o se perdió como consecuencia del suceso, dado que las fórmulas financieras usadas para ese efecto y aceptadas por la jurisprudencia, incluyen, en primera medida, la actualización de esos ingresos. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha trazado reglas semejantes a señalada.

Por ejemplo, en SC, 30 Jun. 2005, Rad. 1998-00650-01, al retomar los *“parámetros que con el mismo propósito se tuvieron en cuenta entre otras, en sentencias del 7 de octubre de 1999, 4 de septiembre de 2000 y 5 de octubre de 2004”*, era necesario determinar: *“a) el monto de los ingresos mensuales que la occisa percibía, o podía percibir, cuando se produjo su fallecimiento; y su valor actualizado; b) el porcentaje de esos ingresos que destinaba para su propio sostenimiento; c) la vida probable de la víctima, y d) el período durante el cual podía beneficiarse la demandante de la ayuda económica que le brindaba su progenitora”*. (Subraya la Sala).

Dichas fórmulas son las siguientes: La primera para el lucro cesante consolidado o pasado, y la segunda para el lucro cesante futuro.

$$a) \text{ LCP} = Va \times [(1 + i)^n - 1] / i$$

Donde, «LCP» corresponde al lucro cesante pasado; «Va» al valor actualizado del lucro cesante mensual; «i» a la tasa de interés por período (6% anual, art. 1617, Código Civil), y «n» al número meses a liquidar.

³ Tamayo Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil, tomo II. Edición 1999. Pág. 117.

$$b) LCF = Va \times \{[(1 + i)^n - 1] / [i \times (1 + i)^n]\}$$

Donde Va corresponde, como se anotó, a la renta actualizada; i al interés legal del 6% anual que debe deducirse por el valor anticipado, y n al número de meses que abarca el período indemnizable

Establecido que la renta es un insumo esencial para cuantificar el lucro cesante, tanto consolidado como futuro, se tiene que, según la actora, ella trabajaba para la empresa “*Onix Producciones*”, recibiendo un salario de \$2.200.000 mensuales, monto que quiso acreditar con el dicho de los testigos Hugo León Mira Figueroa, María Carolina Herrera Pulgarín, Sandra Milena Carmona Galvis y Mariela Bolívar Roldán, quienes, en suma, dieron cuenta de esa cantidad o, incluso, de una superior, pero sin evidenciar un trabajo invariable, sino ocasional y relacionado con múltiples ocupaciones. Fíjese el primero de ellos expresó que para él era difícil calcular el promedio recibido; aludió a temporadas altas de trabajo como los días de la madre, septiembre o diciembre, y habló de compra de cabello y elaboración de pelucas, trabajo de estilista, modelaje, protocolo y hasta actriz, pero no se refirió a un trabajo constante, con una remuneración promedio.

Por otra parte, la aparente prueba que surge del dicho de algunos testigos se desvanece cuando se escucha a la propia pretensora. Memoremos que ella no exhibió los comprobantes del pago y lo justificó en que nunca le entregaron recibos, dado que eran trabajos intermitentes, fuera que no estaba afiliada a una EPS para el momento de los hechos (min. 1:39:53 a 1:41:42, video 4, audiencia de instrucción y juzgamiento). En esa medida, como no eran trabajos continuos, de los cuales se devengara una renta constante, no era posible hacer la liquidación, con base en el monto reclamado, se recuerda, de \$2.200.000, sino que debía hacer, como lo hizo la a quo, con base en el salario mínimo legal mensual vigente.

Por otra parte, es notorio que el Juzgado actualizó la renta sin tener en cuenta el factor prestacional, que para el censor oscila entre el 25% y el 30%. Empero, para dilucidar este aspecto basta recordar que la señora Carmona Galvis no acreditó indubitadamente que ella tenía un trabajo constante, del cual se desprendiera el pago de prestaciones sociales; tanto es así que dijo no estar afiliada a EPS. Luego, cuando la a quo aplicó la presunción de un salario mínimo, no podía adicionar el mentado porcentaje.

Ergo, este reparo no puede prosperar y, en este punto la sentencia debe ser confirmada, aunque, dado el tiempo transcurrido, el pago de la suma dispuesta por la a quo deberá ser indexado, según el IPC causado entre la fecha de la sentencia de primer grado y la de esta providencia, siguiendo la preceptiva del artículo 283 del Código General del Proceso.

Debe advertirse que esta decisión no contradice lo consagrado en el canon 328, inciso inicial, del Código General del Proceso, de un lado porque al haber apelado ambas partes, *“el superior resolverá sin limitaciones”*, reza de ese modo la norma citada; y, de otro, porque el tema de la actualización del dinero puede ser abordado de oficio, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, punto sobre el cual ha señalado: *“En torno al punto de la indexación, la Corte ha puesto de relieve que un añadido como ese no representa una nueva pretensión del demandante, sino que corresponde precisamente a un aspecto implícito de la súplica resarcitoria, cuyo fin no es otro que hacer que el quantum del daño a reparar -que se determina en moneda corriente- no se vea disminuido en perjuicio del demandante por las oscilaciones de una economía inestable.”*⁴

5.3.3.- Análisis del daño emergente. De conformidad con el canon 1614 del Código Civil, debe entenderse *«por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento»*.

Ahora, doctrinariamente se ha señalado que *«hay daño emergente cuando un bien económico (dinero, cosas, servicios) salió o saldrá del patrimonio de la víctima»*⁵, de manera que el daño emergente está compuesto por los gastos en los que haya tenido que incurrir la víctima, como consecuencia del hecho dañoso, o en la pérdida, deterioro o destrucción de un bien que antes del suceso figuraba en su patrimonio.

En este caso, el daño emergente no fue sustentado fácticamente en la demanda, dado que ningún hecho lo explica, pero en las pretensiones se dice que la señora Carmona Galvis incurrió *“en gastos generados con ocasión del accidente de tránsito, tales como pago de dictámenes médico periciales, historia de tránsito,*

⁴ SC 209 de 2005, SC de 4 de septiembre de 2000, expediente 5602; SC de 18 de octubre de 2001, expediente 5932; SC de 30 de marzo de 1984, CLXXVI, 136, entre otras.

⁵ Tamayo Jaramillo, Javier. De la Responsabilidad Civil, tomo II. Pág. 117.

pago de cuota moderadora y otros” (fl. 3), y en la apelación se menciona los pagos efectuados a la Clínica León XIII.

Sin embargo, en parte alguna del expediente hay evidencia documental de los pagos realizados, ni es claro a cuáles dictámenes periciales se refería, esto es, si es a la primera valoración de pérdida de capacidad laboral o si es al informe del Instituto Neurológico de Colombia. Además, no es prístino si ese informe se da como resultado de las consultas y exámenes o si se realizó, a modo de prueba pericial.

Igualmente, no se cuenta con recibo de pago del valor del historial de tránsito, ni se encuentra relación entre el accidente y las cuotas moderadoras pagadas, en tanto, la afiliación a EPS se realizó con posterioridad al suceso y se desconoce cuáles fueron las evaluaciones realizadas.

Por lo tanto, no era posible acceder al reclamo por este guarismo y, en este sentido, se debe confirmar la sentencia apelada.

5.3.4.- Valoración de los perjuicios extrapatrimoniales.

5.3.4.1.- Por daño moral en su ámbito subjetivo, se entiende la afectación de aspectos íntimos de la víctima o de otros, que como consecuencia de un hecho dañoso se ven sometidos al dolor, a sufrimientos y aflicciones de índole espiritual, sentimental o afectiva de difícil, pero no imposible valoración, aunque para su tasación se acuda al arbitrio judicial, desde luego prevalido de la intensidad del daño y de las circunstancias en que se muestra ostensible la congoja, la angustia o la desesperación del lesionado y/o sus allegados.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha considerado:

«El daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, 'que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo' (cas.civ. sentencia 13 de mayo de 2008, SC-035-2008, exp. 11001-3103-006-1997-09327-01), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos, concretándose en el menoscabo 'de los sentimientos, de los afectos de la víctima, y por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso' (Renato Scognamiglio, voz Danno morale, en Novissimo Digesto italiano, vol. V, Turín, Utet, 1960, p. 147; ID., Il danno morale, Milano, 1966; El daño moral- Contribución a la

teoría del daño extracontractual, trad. esp. Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia, Antares, Bogotá, 1962, pp.14 ss.), o sea, son daños pertenecientes al ámbito de los padecimientos del ánimo, las sensaciones, sentimientos, sensibilidad, aptitud de sufrimiento de la persona y por completo distintos de las otras especies de daño.⁶

Así las cosas, el daño moral se ubica en lo más íntimo del ser humano y por lo mismo resulta inestimable en términos económicos, aunque la jurisprudencia ha sostenido que, únicamente a manera de relativa satisfacción, es factible establecer su *quantum* «*en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador*» (SC18 Sep. 2009, rad. 2005-00406-01. Negrillas intencionales).

En el evento actual es claro, conforme lo probado, que la señora Martha Elena Carmona Galvis fue lesionada en su corporalidad, específicamente, padeciendo un trauma encéfalo craneano leve y un latigazo cervical, lo que llevó a una pérdida de capacidad laboral del 34.6%. Ese dolor sufrido supuso, para el Juzgado, una condena equivalente a 15 SMLMV, la cual no se muestra distante de precedentes vinculantes, provenientes de la Corte Suprema de Justicia, que el Juzgado debía observar, para efectos de la tasación del daño moral.

Ciertamente, la jurisprudencia nacional, como en la casación de 07 de diciembre de 2018, exp: 2003 00833 01, estableció unos topes respecto de los cuales es claro que la cantidad impuesta en el fallo apelado no transgrede estos baremos, de suerte que en este caso la afectación moral se encuentra a tono con el precedente citado, dado que, si bien hay un daño cognitivo que se ubica como trauma frontal, a la larga son dolencias leves que no permitían una condena mayor. Así que, el resarcimiento del daño moral de la señora Carmona Galvis, fijado por el Juzgado, es proporcional y, por ende, debe ser confirmado.

5.3.4.2.- Según lo tiene decantado la Corte Suprema de Justicia, el daño a la vida de relación constituye una modalidad de perjuicio extrapatrimonial de carácter autónomo y diferente a los perjuicios morales. Así lo señaló en sentencia SC13 may. 2008, rad. 1997-09327-01⁷, donde se expuso:

⁶ CSJ SC, 18 sep. 2009. Radicación n° 20001-3103-005-2005-00406-01.

⁷ Reiterada, entre otras, en: SC 9 Dic. 2013, rad: 2002-00099-01; SC5050-2014 y SC5885-2016.

“(...) es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño - patrimonial o extrapatrimonial - que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas.”

Por otra parte, en la misma providencia se afirmó que este tipo de agravio tiene su expresión en la esfera externa del comportamiento del individuo, *“situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho”* y, además, *“en las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico (...)”*.

Como todos los perjuicios, dado que el resarcible es aquel de carácter cierto, recae sobre quien demanda su reparación la carga de demostrar la estructuración de esta tipología, que en un caso como el presente, se apreciaría a partir de aquellas manifestaciones del afectado de las que pudiera inferirse la disminución de su interés por participar en actividades de las que antes disfrutaba o de aquellas que le generaban algún regocijo en los ámbitos individual, familiar o social, con fines recreativos, culturales, de relaciones sociales, y en general de aquellas en las que aprovechaba su tiempo libre.

Como no es posible negar la causación de este perjuicio, dada la incuestionable afectación fisiológica, sumada a que ésta trasciende a aspectos placentarios de la vida e, incluso, se vincula con las condiciones de existencia personal, estima la Sala que este guarismo se debía reconocer, como en efecto sucedió.

En tal medida, dispuesta la Sala a analizar los hechos fundantes del reparo, se advierte que la pretensora sufrió unas lesiones físicas, ya descritas, que conllevaron un daño cognitivo, los cuales generaron, no solamente un dolor, ya valorado, sino una afectación vivencial, corroborada por los testigos. Sin embargo, una vez más, la levedad del trauma no permite aumentar la condena impuesta, como lo quiere la activa.

En efecto, la tasación se estima precisa y ajustada, con relación a casos mucho más graves, que ha contemplado la jurisprudencia nacional vinculante, como en la casación de 20 de enero de 2009, en la que estableció en 191.12 salarios mínimos mensuales el daño a la vida de relación de una persona que había sufrido además de las lesiones físicas una secuela neurológica insuperable, que le causó una pérdida en su capacidad laboral del 90%. Luego, si este evento tiene una característica leve, al extremo que la mayoría de exámenes arrojan resultados normales y no hay evidencia de imposible recuperación, lógico es pensar que la condena debe ser mucho menor, por lo que, la estimación de 10 SMLMV resulta acorde con lo probado en el proceso y con el precedente citado.

5.4.- El juramento estimatorio y la sanción legal por inadecuada diferencia entre la reclamación y la sentencia.

5.4.1.- Análisis teórico. El juramento estimatorio, en el Código General del Proceso, se encuentra regulado en el artículo 206, cuyo tenor es el siguiente:

“Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.

Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes.

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.

<Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la

que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada.

El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada en el juramento.

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.

PARÁGRAFO. <Parágrafo modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014. El nuevo texto es el siguiente:> También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.

La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.”

En el Código de Procedimiento Civil también se contemplaba el juramento estimatorio (art. 211), pero como un medio probatorio, al que se podía acudir, si era la intención del demandante o promotor de la actuación, pero se podía dejar de lado, si el accionante apoyaba su petición en otras probanzas. Sin embargo, desde la expedición de la Ley 1395 de 2010 la naturaleza del juramento estimatorio cambió bastante, dado que, su utilización como medio probatorio para reclamar perjuicios patrimoniales, frutos o mejoras no es optativo sino obligatorio y, además, se convirtió en requisito de la demanda, como expresamente se consignó en el artículo 82-7 del Código General del Proceso.

De manera que, en la actualidad, el juramento estimatorio es un medio probatorio de obligado uso cuando se pretenda el reconocimiento de indemnización patrimonial, frutos o mejoras, y es un requisito formal de la demanda, no sólo por su consagración legal, sino porque la estimación debe ser razonada, esto es, argumentada o con fundamento en pruebas anexas con la demanda.

Es de suma importancia esta figura, en tanto ajusta las pretensiones de la demanda, a tal extremo que el juez no puede reconocer una suma superior a la solicitada, y va de la mano de la consonancia, como quiera que la congruencia en el fallo se mira también por el acatamiento de lo expresado en el juramento estimatorio.

Sobre el particular, en SC 4966 de 2019, expediente 2011 00298 01, la Corte Suprema de Justicia, señaló:

“Esa regla introdujo un parámetro complementario de congruencia (no previsto en el Código de Procedimiento Civil⁸), al prohibir la imposición de condenas que superen el importe de lo tasado bajo juramento por el demandante; esto a menos que su súplica verse sobre detrimentos económicos «que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda», como ocurre, a guisa de ejemplo, con los frutos producidos después de iniciado el juicio, o la indemnización de perjuicios derivados de lesiones corporales cuyas secuelas están pendientes de valoración definitiva. Por consiguiente, aun en este novedoso escenario normativo no puede predicarse una absoluta simetría entre (i) las indemnizaciones, compensaciones o el pago de frutos o mejoras perseguidas y, además, estimadas razonadamente bajo juramento por el convocante, y (ii) el límite superior de las condenas que podría imponer el juez por esos mismos conceptos, sin incurrir en un fallo ultra petita.

Dicho de otro modo, como las pretensiones dinerarias concretas han de armonizar –por vía general– con el juramento estimatorio, puede concluirse que, a partir de la entrada en vigor del citado precepto 206 del Código General del Proceso, la inclusión de fórmulas condicionales complementarias como las predichas («o la que se pruebe», «la que resultare probada», «la que se probare en el proceso», entre otras), solamente impondrá al juez de la causa tasar las condenas en su real dimensión, sin la limitante de aquél guarismo específico, cuando el mayor valor tenga relación con pérdidas cuya extensión sea determinable «con posterioridad a la presentación de la demanda».”

Ahora bien, cuando la sentencia, analizada alrededor del juramento estimatorio, resulte sumamente diferente a lo pretendido, de un lado, porque la condena sea inferior al 50% de lo rogado o, de otro, porque la pretensión se negó por falta de prueba de los perjuicios, los frutos o las mejoras, el citado canon 206 consagra una sanción para el litigante demandante.

⁸ Recuérdese que el artículo 211 de esa normativa (según la modificación introducida por el canon 10º de la Ley 1395 de 2011), consagraba lo siguiente: «Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Si la cantidad estimada excediere del treinta por ciento (30%) de la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia».

Efectivamente, la norma establece que “[s]i la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada”, lo que también aplica si la sentencia niega las “pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.”

Pero esa condena pecuniaria no debe entenderse como una especie de responsabilidad objetiva, esto es, al margen de la culpa, sin tener en cuenta la esfera volitiva del sujeto activo de la conducta; pues, el mismo canon 206 relaciona ese resultado negativo con elementos propiamente constitutivos de culpa, cuando consagra:

“Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospecha que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. (...)”

La aplicación de la sanción prevista en el presente párrafo sólo procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.”

Nótese que, en el primer supuesto, la objeción de oficio conlleva un juicio de reproche sobre la conducta del actor, quien, así vistas las cosas, habría acudido a una estimación injusta, ilegal o fraudulenta, algo que no es objetivo; por el contrario, se concentra en analizar el comportamiento del pretensor para arribar a una conclusión netamente subjetiva, es decir, la objeción no prospera únicamente por la diferencia en las cifras, sino porque el actor incurrió en acciones ilegales o fraudulentas, lo que es un tipo de dolo o bien, de culpa. Y en el segundo supuesto también se alude a culpa, ya que, si el *petitum* es negado por falta de prueba de los perjuicios, los frutos o las mejoras, la sanción se impone si la carencia demostrativa es producto de un “actuar negligente o temerario”, lo que, de suyo es constitutivo de culpa.

En definitiva, las sanciones establecidas en el precepto 206, alusivas al juramento estimatorio, no se imponen objetivamente, sino en la medida que haya dolo o culpa del convocante. Claro, esta brota sencilla si se tiene en cuenta que el

juramento estimatorio conlleva un cálculo razonado de lo pedido, y por ese razonamiento debe responder la parte, si es ilegal, fraudulento o simplemente exagerado, pero si compagina con prueba documental, proveniente de un tercero, debe analizarse si éste obro con dolo o culpa al haber seguido ese elemento demostrativo, al punto que, si su actuación se aleja del dolo o la culpa, imposible resulta aplicar las sanciones en comento.

Dicho en otras palabras, si el juramento se basó en una prueba documental, como la referenciada, pero ésta es desvirtuada, total o parcialmente en el proceso, no hay una ilegalidad o fraude imputable al demandante y, así las cosas, no procede la aplicación de la condena a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

5.4.2.- Caso concreto. En este caso se advierte, desde un principio, que la pretensión indemnizatoria por concepto de lucro cesante se fincó en que a la demandante la habían calificado con una pérdida de capacidad laboral del 60,4%, producto de la evaluación realizada por la IPS Universidad de Antioquia y, además, teniendo en cuenta su salario, el cual, se dijo, equivalía a \$2.200.000. Así lo dio a conocer la actora en el juramento estimatorio, pero en el trasegar procesal se presentó una segunda calificación de invalidez, en esta ocasión del 34,6%, elaborada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia.

En este orden, observa la Sala que el solo hecho de rebajar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, casi a la mitad, conlleva una notoria merma en la reclamación, la que podría suponer una diferencia de más del 50%, en los términos del canon 206 trasuntado.

No obstante, lo anterior, la Sala no considera que la actora hubiera actuado en forma ilegal o fraudulenta, sino que se apoyó en un concepto de una entidad de salud, lo cual impide asumir que hubo dolo o culpa de su parte. En modo similar, la liquidación del lucro cesante, con base en el salario mínimo, no se dio como consecuencia de una negligencia en la producción probatoria, sino como resultado de que las probanzas, si bien claras y completas, no eran suficientemente terminantes para asumir que la señora Martha Elena Carmona Galvis, en efecto recibía \$2.200.000 mensuales.

En esa medida, no era posible sancionar a la pretensora por la diferencia entre lo pedido y lo concedido en la sentencia, más allá que inicialmente pareciera haber la disconformidad que estipula la regla citada.

Incluso, es de ver que la propia demandante, por conducto de su abogado, pidió que la cuantificación del rubro mencionado se hiciera con base en la segunda calificación (min. 4:36, alegaciones de conclusión, video 2), es decir, desistió parcialmente de lo pedido en la demanda, en los términos del artículo 314 del Código General del Proceso, y ese hecho se convirtió en una modificación del derecho pretendido, de necesaria observancia por el juzgador, como así lo consagró el creador legal en el artículo 281, último inciso, de la misma obra.

Por manera que la diferencia entre la suma jurada y la consignada en el fallo no compaginaba con la descrita en el precepto 206, ni podía conllevar la sanción impuesta, la cual, en consecuencia, se revocará.

IV. CONCLUSIÓN GENERAL.

Por consiguiente, más allá que no se podían desechar el dictamen pericial y el concepto técnico, como lo hizo la a quo, a la postre se llegaba a la misma conclusión, y como los perjuicios están bien liquidados, se confirmará la sentencia apelada, aunque el pago del lucro cesante deberá hacerse indexado.

De otro lado, se revocará la sanción impuesta a la actora, por la diferencia entre la suma pretendida bajo juramento y la impuesta en el fallo objeto de alzada, y no se impondrán costas en esta instancia, dado que los recursos de ambas partes serán negados y la sanción revocada no es de aquellas que favorezca a la contra parte.

V. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE.

PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia apelada, de fecha, procedencia y contenido ya indicados, cuyo numeral primero **SE MODIFICA** para ordenar que las suma señaladas por concepto de lucro cesante se paguen indexadas entre la fecha de la sentencia de primera instancia y esta fecha, según el IPC causado entre esos dos extremos temporales.

SEGUNDO. Igualmente, **SE REVOCA** el numeral quinto de la parte resolutive de la sentencia, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

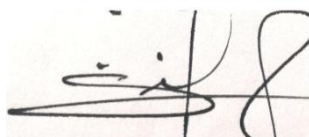
Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022

Con aclaración de voto



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado